

Ecuador: del callejón sin salida al paro indígena de junio de 2022*

Ecuador: From the dead end to the indigenous strike of June 2022

*Pablo Samaniego Ponce, Katiuska King Mantilla
y Rubén Flores Agreda***

ABSTRACT

The 2022 indigenous strike in Ecuador was one of the most significant protests in recent years, surpassing even that of October 2019. The article examines this event to study the socioeconomic factors that could have provoked social outburst, particularly in the context of the dismantling of social protection policies. The most relevant ones are the loss of purchasing power of production, lower income possibilities in urban areas, the effects of indebtedness, depopulation, and migration. The analysis of these dimensions leads to the conclusion that the farmers are trapped in a dead end regarding their subsistence and reproduction. This aggravates the living conditions in the countryside and creates incentives to abandon small-scale agricultural production, which would be very dangerous for the future in terms of food sovereignty or security.

Keywords: Household behavior; family economy; social conflict; agricultural economics; living conditions; poverty. *JEL codes:* D1, D7, E2, I3.

* Artículo recibido el 13 de mayo de 2024 y aceptado el 7 de agosto de 2025. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores.

** Pablo Samaniego Ponce, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito (correo electrónico: psamaniego038@puce.edu.ec). Katiuska King Mantilla, Universidad Central del Ecuador, Quito (correo electrónico: katiuska.king@gmail.com). Rubén Flores Agreda, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (correo electrónico: rfloresa@puce.edu.ec).

RESUMEN

El paro indígena de 2022 en Ecuador fue una de las protestas más significativas de los últimos años, mayor incluso que la de octubre de 2019. El artículo toma este evento para estudiar los factores socioeconómicos que provocaron el estallido social, en el marco del dismantelamiento de las políticas públicas de protección social. Por considerar los más relevantes, se incluyen la pérdida de poder de compra de la producción agrícola, menores posibilidades de obtener ingresos complementarios, efectos de los endeudamientos, despoblamiento y migración. El análisis de esas dimensiones conlleva a concluir que los campesinos están en un callejón sin salida en términos de su subsistencia y reproducción. A su vez, esto agrava las condiciones de vida en el campo y genera incentivos para que se abandone la producción agrícola de pequeña escala, lo que sería muy peligroso para el futuro en términos de soberanía o seguridad alimentaria.

Palabras clave: comportamiento de los hogares; economía familiar; conflicto social; economía agrícola; condiciones de vida; pobreza. *Clasificación JEL:* D1, D7, E2, I3.

INTRODUCCIÓN

En junio de 2022 la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) convocaron a un paro que tuvo una duración de 18 días, así fue el evento de protesta más largo del siglo XXI en Ecuador.

Por la importancia del evento, teniendo en cuenta que, además, puede suponerse que fue la continuación de la movilización anterior de octubre de 2019, la cual fue contenida por las condiciones extraordinarias aplicadas para hacer frente a la pandemia de covid-19, cabe preguntarse sobre los factores económicos que la originaron. En este sentido, se considera necesario profundizar en algunas de las demandas económicas expresadas en los comunicados de la Conaie y en las mesas de diálogo, pese a que los fenómenos asociados a esas negociaciones son, tal vez, más complejos por su propia configuración y sus consecuencias. Las demandas relacionadas con los temas

abordados en este artículo son reducción de los precios de los combustibles, moratoria de un año y renegociación de deudas, precios justos para los productos del campo, inversión pública para frenar la precarización laboral, moratoria de la expansión de la frontera de extracción de minerales metálicos y petróleo, control de precios de los productos de primera necesidad y dotación de presupuesto suficiente para garantizar el acceso a la salud y la educación (Conaie, 2022).

Cabe mencionar que no existe un consenso sobre si las razones que motivaron el paro fueron más coyunturales, respetaron la tradición histórica del movimiento indígena o si existen elementos subjetivos que llevaron a la movilización, como se discute más adelante. En lo político, una forma de deslegitimar este tipo de sucesos es arremeter contra las cabezas visibles o quien las promueve. Mientras tanto, en el plano económico se consideran tanto las decisiones tomadas por el gobierno de Guillermo Lasso, presidente en el momento de los eventos, como del gobierno anterior de Lenin Moreno, relacionadas con el acuerdo de servicio ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el subsidio a los combustibles, así como aspectos estructurales de la economía ecuatoriana que han tenido efectos en la actividad económica, las condiciones laborales, la oferta pública de salud y educación, así como en fenómenos sociales de exclusión y pobreza.

Un asunto que se ha vuelto común en la confrontación política de los últimos tiempos es la descalificación del adversario (Gutiérrez-Rubí, 2019). Esta estrategia común en la práctica de la política actual impide conocer los problemas que se presentan en la sociedad, lo que lleva a que la “política iracunda contagia. Polariza con tal agresividad, que disuade a los moderados y embarra el campo de juego democrático contaminando a los rivales de odio y beligerancia” (Gutiérrez-Rubí, 2019: 97). Esta “política iracunda” se exagera cuando el racismo conduce, como señala Dussel (1994), al desconocimiento del otro como sujeto con capacidad de acción y participación igualitaria en la sociedad y, por lo tanto, en la determinación de las políticas públicas.

El artículo está estructurado en seis partes. En ésta se introduce el tema. Más adelante, la sección I expone los elementos de contextualización del paro. La sección II hace una síntesis del estado del arte en los estudios agrarios en el Ecuador. La sección III describe la metodología utilizada en el artículo. La sección IV presenta el análisis y los resultados de los cuatro factores analizados: pérdida de poder de compra de la producción, menores posibilidades

de obtener ingresos, efectos de los endeudamientos, despoblamiento y migración. La última sección discute los planteamientos y concluye.

I. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PARO DE 2022

El paro de junio de 2022 generó distintas interpretaciones que se pueden contrastar con el propósito de presentar el debate existente. Cuví y Acosta (2022) sostienen que la Conaie se alejó de sus reivindicaciones históricas para atender un problema de carácter coyuntural, mientras que para Juncosa y Aguirre (2023) la movilización representó la continuidad de las luchas inauguradas con el *Inti Raymi* de 1990. Por otra parte, Hidalgo Flor (2020) señala que el “asedio del capitalismo” por la expansión de los cultivos de flores y brócoli, el crecimiento urbano y la expansiva progresión de la extracción minera son las razones por las que la protesta que se inició en 2019 cohesionó a las comunidades indígenas. Como se verá, los indígenas forman un grupo heterogéneo desde una perspectiva socioeconómica, pero según Ospina (2022: 18) lo que les da cohesión es que “en un tiempo y un país donde la palabra de los políticos y de la política está tan desacreditada, las organizaciones indígenas hablan por sus actos, sus bases reconocen sólo a quienes han pasado por ese trajinar organizativo de *hablar haciendo*” (las cursivas son del autor).

Por otro lado, para Bretón (2025: 4-5):

A diferencia de otros levantamientos capitaneados por el movimiento indígena, en esta ocasión las organizaciones étnicas tuvieron la destreza de entretener un discurso transversal, más allá de lo identitario, con capacidad de atracción para los sectores subalternos golpeados por la crisis (desempleados, jóvenes sin un futuro claro, lumpemproletariado diverso, moradores de periferias urbanas insalubres e invivibles), e incluso para fracciones de clases medias en proceso de pauperización tras el fin del espejismo desarrollista de la década correísta.

Finalmente, según palabras del presidente anterior de la Conaie, Leonidas Iza, los levantamientos son principalmente el resultado de las reivindicaciones identitarias, que han tenido la fuerza de estructurar una propuesta política de izquierda que supera los límites que encarnan los partidos políticos y el resto de los movimientos sociales, con excepción de los conformados por

moradores de las periferias urbanas y, en algunos aspectos, las organizaciones feministas (Iza, Tapia y Madrid, 2021).

En consecuencia, uno de los detonantes del paro de octubre de 2022 fue el anuncio de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Sin embargo, la protesta escaló en intensidad por la forma como el gobierno gestionó la crisis, pues en la noche del primer día de la movilización se detuvo al presidente de la Conaie (González, 2022). En medio del paro, el gobierno deslegitimó el movimiento al asociarlo con el narcotráfico (Mancero, 2023), con la pretensión de crear una pseudo realidad para provocar “un contraefecto movilizatorio en el que sean grupos de ciudadanos los que se enfrenten entre sí” (Unda, 2022: 66). Esto se materializó en pequeñas movilizaciones en Quito y Guayaquil en rechazo al paro, y en la exacerbación del racismo en las redes sociales (Ospina, 2022).

Por otra parte, con el propósito de contextualizar las movilizaciones, cabe señalar que la economía ecuatoriana en 2022, a pesar de que creció 4.8% en términos reales por persona, no se recuperó en el nivel del pico anterior más alto observado en 2017 (Banco Central del Ecuador, 2023). En esos cinco años, la economía se contrajo, en gran parte debido a la pandemia, que magnificó la tendencia observada en las recesiones de 2018 y 2019. En 2019 el gobierno ecuatoriano firmó un acuerdo de servicio ampliado con el FMI que contempló, entre otras medidas, reducir el gasto público, lo cual se cumplió incluso durante la pandemia en varias áreas gubernamentales, así como eliminar los subsidios a los combustibles (King y Samaniego, 2020).

Como resultado, a partir de 2019 los servicios públicos sufrieron un notable deterioro, evidente en la carencia de insumos médicos,¹ en la reducción del personal de la salud, en la contracción de la matrícula en el bachillerato, y en la inversión que se redujo más de dos veces entre 2017 y 2022 (Banco Central del Ecuador, 2024a). En definitiva, afectó la oferta, el funcionamiento de los programas de protección social (Salgado, 2020; Fernández-Wulff, Dubler, Sosa y Schutter, 2020) y las condiciones en el mercado de trabajo. Garuda (2000), con base en un estudio de varios países, señala que los programas del FMI tienen efectos negativos sobre la pobreza y la distribución del ingreso, especialmente los programas más exigentes; ése sería el caso de Ecuador.

¹ En plena pandemia, por ejemplo, no se realizó la campaña de vacunación en niños porque no se compararon los inmunizadores (Samaniego y Maldonado, 2021).

La situación provocada por la pandemia, agudizada por el plan de ajuste mencionado, provocó que en el área rural, especialmente entre los indígenas, la pobreza aumente significativamente. La tasa de pobreza multidimensional en el área rural y para la población indígena alcanzó un mínimo en 2016, pero fue más del doble de la media nacional. Tuvo sus puntos máximos entre 2019 y 2022, y afectó a cerca de 76% de la población indígena, 70% de la rural, en comparación con 39% en el promedio del país (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC], 2024a). Dentro del programa de ajuste, se debe resaltar la expedición de la denominada Ley Humanitaria. Esta norma flexibilizó las condiciones de contratación en el mercado de trabajo formal; es una medida que explica la ampliación del subempleo y otro empleo no adecuado (Romo, 2022). Por otra parte, pero en relación con lo anterior, las encuestas de empleo dan cuenta de una reducción de 1.1% en promedio anual en el ingreso laboral a nivel nacional en 2017-2022, en tanto que en el área rural la caída fue de 2.4% en promedio anual (INEC, 2024b).

Por otra parte, también interviene en este contexto que la economía ecuatoriana esté dolarizada, lo que determina, entre otros aspectos, que los flujos comerciales estén condicionados por un tipo de cambio cuya cotización es ajena a las condiciones macroeconómicas del país. En los cinco años analizados (2017-2022), el peso colombiano se devaluó en 49% y el nuevo sol peruano en 12.8%, respecto al dólar estadounidense.² Asimismo, los tratados de libre comercio (TLC) firmados por los países vecinos (y luego por Ecuador con la Unión Europea), con los que se mantiene un intenso flujo comercial, pudieron influir para que al país ingresen productos agrícolas provenientes de los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países desarrollados, los cuales al mantener subsidios aplican una suerte de barreras paraarancelarias (Acosta, Falconí y Jácome, 2006) y compiten en precios con la producción agropecuaria doméstica.

Estos elementos contextualizan las variadas formas de articulación a la que recurren los campesinos para obtener los medios de subsistencia. En términos generales, como se precisa en la siguiente sección, los campesinos combinan trabajo asalariado y trabajo campesino, el cual venía debilitándose, se quebró durante la pandemia y así dio pie a un deterioro en las condiciones de vida y tuvo, entre otros efectos, un aumento en el endeudamiento y la emi-

² Según Martínez (2005), la dolarización de la economía “tornó no competitivos a los productores campesinos al enfrentarlos en condiciones desfavorables (salarios y costos de producción más altos) a la producción agropecuaria de países vecinos”.

gración. Asimismo, estos factores tuvieron efectos en la desarticulación familiar, social, cultural y hasta política, elementos que escapan de los objetivos de este artículo.

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE ESTUDIOS AGRARIOS EN ECUADOR

Las condiciones socioeconómicas en el sector agrícola de Ecuador son diversas y heterogéneas porque no se cumplieron las transiciones hacia el capitalismo que se esperaban en las décadas de 1960 y 1970. Los marxistas preveían que el cambio o la evolución del agro se produciría por la vía *junker* o *farmer*,³ lo que daría lugar a la transformación capitalista de las relaciones de producción (Murmis, 1980; Ibarra, 2016). W. Arthur Lewis (2024/1960), desde una perspectiva diferente, llegaba, sin embargo, a una conclusión similar, al suponer que los diferenciales en la productividad marginal del trabajo entre las actividades tradicionales y modernas (entiéndase como las que producen con base en relaciones capitalistas de producción) llevarían a la modernización del sector tradicional de manera que toda la economía elevaría su nivel de productividad y, por lo tanto, los ingresos.

Cincuenta o sesenta años después estamos frente a una estructura agraria conformada por formas tradicionales y “precapitalistas” de producción, junto con gamas de modos de producción, incluidos aquellos en los que prevalecen las relaciones enteramente capitalistas. Esta conformación fue prevista luego de que en las leyes de reforma agraria de 1964, 1973 y 1979 (Gondard y Mazurek, 2001) se amplió la frontera agrícola, dentro del programa de colonización, con la incorporación de tierras no explotadas o que formaban parte del territorio de sociedades consideradas atrasadas y dispersas, y, por otra parte, por la afectación de haciendas de gran extensión cultivadas con niveles de productividad muy bajos, dentro de entornos con excedentes de mano de obra (Jordán, 2003; Gondard y Mazurek, 2001; Guerrero, 1977).

³ Se entiende por vía *junker* a la modernización agrícola originada en la transformación de las antiguas haciendas en las que prevalecían relaciones de producción precapitalistas en unidades de producción en las que se generalizan las relaciones salariales y se incorpora el cambio técnico; la consolidación de las haciendas modernas puede conducir a la expropiación de la tierra de los pequeños campesinos. La vía *farmer* también se denomina vía campesina porque consiste en que la modernización del agro parte de la disolución de la hacienda que da paso a que esa tierra sea cultivada por muchos campesinos que tienen la cantidad de recursos suficientes para sostenerse en la actividad en el largo plazo (Murmis, 1980; Kautsky, 2015).

Esa estructura heterogénea, que se ha modificado por la propia evolución y dinámica gestadas desde el proceso de reforma agraria en conjunto con los diferentes patrones de política pública, incluida la política económica, es la base para investigar las posibles causas socioeconómicas de los levantamientos indígenas de los últimos años. Con el fin de mostrar los rasgos más importantes de los cambios en las últimas décadas en el área rural, especialmente la serrana, debe recurrirse a los varios estudios sobre el tema, ya que las estadísticas sobre el sector son insuficientes, pues el último censo agropecuario data del 2000.

De manera general, el debate que más nos interesa aquí es aquel que permite conocer las estrategias de reproducción de los habitantes del área rural, las cuales se modifican dependiendo de varios factores, como la dificultad para satisfacer las necesidades a partir de la producción propia. Tal limitación proviene principalmente de las restricciones en el acceso a la tierra, luego de las varias reformas agrarias, ya que las propiedades afectadas fueron mínimas, en su mayoría las que pertenecían a la Iglesia o el Estado. En este sentido, la redistribución fue muy restringida (Guerrero, 1977), lo que se fue agravando posteriormente por el fraccionamiento debido a las herencias.

Se pueden identificar dos tendencias generales interactuantes. En primer lugar, desarrollo y consolidación de extensiones agrícolas, cuya producción es dedicada a la agroexportación, que es una característica prevalectante en la Costa. La primera ola de este tipo de negocios en la Sierra partió con la producción de flores en la década de 1980, actividad menos extensiva en comparación con la de la Costa; ocupa menos de 0.1% de la superficie total cultivada (INEC, 2023). Dentro de este mismo ámbito se encuentran la posterior producción de brócoli y la incorporación paulatina de otros cultivos de alimentos, en unidades de producción con trabajo asalariado.

Según los estudios realizados por Martínez (2017) en la provincia de Cotopaxi, y por Lyall y Colloredo-Mansfeld (2024) en comunidades de las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Pichincha y Sucumbíos, hay un proceso de asalarización parcial o completa de los campesinos, debido a que, por el tamaño de las unidades de producción agrícola propias, no obtienen los suficientes ingresos para subsistir. Así, Korovkin (2005), en su estudio de Pedro Moncayo (cantón de la provincia de Pichincha), concluye que el trabajo en las empresas florícolas ayuda a los antiguos campesinos a salir de la extrema pobreza, pero no a superar la situación de pobreza.

Por otra parte, también se observa que trabajadores del campo, que antes se empleaban en las plantaciones de flores, brócoli u otros cultivos en unidades de producción capitalista, pudieron acumular recursos suficientes para emprender monocultivos permanentes que pueden ser muy rentables, incluso en superficies pequeñas, con la instalación de invernaderos (Lechón y Chicaiza, 2019). Estos autores señalan además que hay casos en que estos productores “recampesinizados” contratan trabajo asalariado. Pese al aporte de estos estudios, sólo se conocen las tendencias de una parte de la Sierra centro-norte, aquellas que tienen más presencia de producción de flores y otros cultivos desarrollados con relaciones capitalistas de producción.

Lo fundamental que muestran los estudios es que las condiciones de reproducción en el área rural tienen límites físicos, sobre todo para aquellos que son herederos de huasipungueros,⁴ pues llega un punto en el que el tamaño de las parcelas impide que se generen suficientes ingresos familiares, pero también influirían, al menos en parte del territorio de la Sierra, el crecimiento de la demanda de la tierra para actividades de agroexportación y de producción capitalista, o la acumulación por desposesión (Martínez, 2017: 681); el crecimiento de las ciudades,⁵ y la ampliación de las redes de transporte, porque habrían facilitado el traslado de los campesinos que son simultáneamente productores autónomos y asalariados, a unidades agrícolas capitalistas o al trabajo asalariado en las ciudades intermedias y grandes. En efecto, Obregón-Biosca (2018: 152), citando a Ascher (2004), señala que “el desarrollo del transporte y las comunicaciones alarga las distancias diarias recorridas, multiplicando las opciones de movilidad para una gran parte de la población en todos los aspectos de su vida: el lugar de residencia, la localización de actividades y trabajos, así como para propósitos de socialización”.

De ahí la importancia del precio de los combustibles en la movilidad. En todos los casos, como advierte Martínez (2017), estos procesos de cambio en las vías de la reproducción campesina han generado una pérdida en la soberanía alimentaria, lo cual es un triunfo del capitalismo, según señala el autor.

Este conjunto de cambios en la estructura de la producción agrícola lleva a considerar que las condiciones económicas de la población económica-

⁴ Los huasipungueros eran los trabajadores agrícolas que antes de las reformas agrarias trabajaban en las haciendas, especialmente serranas, a cambio del acceso a una parcela de tierra (Real Academia Española [RAE], 2025).

⁵ Según Álvarez-Berrios, Parés-Ramos y Aide (2013: 38), “Ecuador tuvo la más alta tasa de expansión de áreas urbanas compactas e intermedias entre 1992 y 2009 comparada con Perú, Colombia y Bolivia”.

mente activa rural están atadas a dos factores fundamentales. El primero es la capacidad de obtener los ingresos suficientes para satisfacer las necesidades con la producción propia, cuya situación se puede observar, indirectamente, a partir de la evolución del poder de compra de los productos agropecuarios en relación con aquellos bienes y servicios que no se producen en el área, porque “ciertas configuraciones particulares de la economía política de los mercados pueden favorecer una agricultura familiar y campesina, mientras que otras las erosionan y facilitan su subordinación a las agroindustrias y los agronegocios” (Ospina, Hollenstein y Latorre, 2020: 56). Pero, en este mismo sentido, los términos de intercambio están mediados por los márgenes de comercialización a los que se enfrentan los productores.⁶

En segundo lugar, la articulación y las características prevalecientes en el mercado de trabajo podrían modificar las estrategias económicas al hacer o no viable que el acceso al trabajo remunerado se convierta en la salida a las limitaciones de la producción campesina, pues “si los asalariados no pueden encontrar condiciones locales decentes, pueden buscar fácilmente empleo en espacios urbanos (construcción, trabajo doméstico y otras actividades informales) o buscar otros trabajos rurales” (Martínez, 2017: 687). Entonces, un segundo espacio a investigar está en la evolución del trabajo y los ingresos. Como se señaló anteriormente, también habría un proceso paulatino de acumulación por desposesión de las pequeñas unidades de producción agrícola, el cual se observa en el cambio en los precios. En efecto, Korovkin (2005: 53), al referirse a las zonas aledañas al cultivo de flores, señala que “En 1993, una hectárea en una comunidad campesina sin acceso a agua para riego costaba entre 1 500 y 2 000 USD [...] En 2002, una parcela similar costaba entre 5 000 y 6 000 USD, mientras que los precios de las tierras regadas, adecuadas para invernaderos, se vendían hasta por 20 000 USD por hectárea” (Korovkin, 1997: 101).

Pese a que la desposesión es difícil de evaluar sin contar con información específica sobre tenencia de la tierra, una forma indirecta de abordarla consiste en observar la evolución de la superficie empleada para cultivos transi-

⁶ Figueroa (1979) utiliza la relación de precios de productos agropecuarios y no agropecuarios en el marco del conflicto que por esos años había por el fomento a la industrialización, ya que ella requería precios de los productos de primera necesidad que no presionen por aumentos salariales urbanos. Por su parte, Bourguignon (1990) presenta un modelo para explicar la desigualdad en el marco del cambio estructural como parte de la teoría del desarrollo, y en él introduce como uno de los factores explicativos a las diferencias de precios, entre el sector “atrasado” y el “moderno”, aunque no desarrolla una teoría explícita sobre los términos de intercambio entre éstos.

torios y permanentes. Se supone que la producción campesina típica, especialmente la serrana (aunque la misma lógica se puede extender a sectores de la Costa y de manera general a la Amazonía), continúa siendo transitoria por el tipo de oferta que realiza, mientras que la producción capitalista o los agronegocios se establecen para monocultivos permanentes. En el medio de estas dos formas, hay una serie de combinaciones que no se puede captar con la estadística existente. A partir de las variadas formas de articulación que establecen los campesinos, la estrategia que combina trabajo asalariado y trabajo campesino se quebró durante la pandemia por el despido de trabajadores de los agronegocios, el deterioro del mercado de trabajo urbano y porque se supone que algunos canales de comercialización se cortaron, modificaron y retrasaron. En esas circunstancias, se presume que los pobladores del área rural tuvieron que contraer deudas a fin de compensar la pérdida de ingresos o abandonar el campo.

III. METODOLOGÍA UTILIZADA

Con esos antecedentes, este análisis supone que existen al menos cuatro factores simultáneos y superpuestos que podrían haber coadyuvado al levantamiento indígena: la caída en los términos de intercambio entre el campo y la ciudad; los altos niveles de intermediación derivados de un cambio en las expectativas de los intermediarios frente a la inicial caída de la demanda durante la pandemia; la presión sobre el uso de la tierra por la conversión de la producción campesina a cultivos permanentes y por la coacción de los sectores agrícolas articulados al cultivo de bienes de exportación para ampliar su área de explotación, y el aumento del endeudamiento que surgió de la reducción de la demanda durante la pandemia.

Este artículo utiliza un enfoque cuantitativo con una cobertura nacional. El alcance del estudio es explicativo por la naturaleza del problema a analizar (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014), y contiene una perspectiva tanto macro como microeconómica. Se utiliza la información pública de encuestas de empleo y desempleo (Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo o ENEMDU), de los índices de precios al consumidor, al productor y de los márgenes de comercialización, así como otra información proveniente de registros administrativos recogida por el INEC y el Consejo de la Judicatura. También se toman estadísticas prove-

nientes de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS) consolidada por el Ministerio de Agricultura respecto al crédito concedido al sector agropecuario por los bancos, las cooperativas y las instituciones financieras, e información de las bases de datos de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) con el propósito de conocer los cambios en el uso de la tierra.

Los índices de precios al consumidor y al productor fueron procesados para definir los términos de intercambio campo-ciudad en el primer caso y el margen de intermediación en el segundo. El proceso para calcular los términos de intercambio o el poder de compra de la producción agrícola se realizó mediante un reproceso de la base de datos del índice de precios al consumidor (IPC) y al productor⁷ con el fin de construir un índice de precios de los productos agropecuarios y otro del resto de bienes y servicios. Luego se dividieron ambos valores para estimar los términos de intercambio. A ambas series se aplicó el método de Hodrick-Prescott con el propósito de observar la tendencia de las series, con base en que éstas se componen además de un elemento cíclico (Hodrick y Prescott, 1997). Interesa conocer la tendencia, pues sería la parte de la serie que se modifica frente a cambios en las condiciones socioeconómicas y en las expectativas.

IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LOS FACTORES

A continuación, analizamos los cuatro factores en cuestión. El primero indaga sobre la relación de precios campo-ciudad y los márgenes de comercialización, pues se asume que a través de ésta es posible observar el cambio en la capacidad adquisitiva de los ingresos generados por la producción agrícola. El segundo propone una lectura de cómo el deterioro del mercado de trabajo urbano, tanto en términos de calidad de los empleos como de la remuneración o del ingreso percibido, reduce las opciones que tienen el trabajo asalariado agrícola y la migración campesina temporal como alternativas para complementar los ingresos obtenidos de la combinación de estrategias reseñada en la parte anterior. Asimismo, se incluye un breve análisis sobre los cambios en el uso de la tierra con el propósito de observar si existe presión

⁷ Los productos que tienen los dos índices y sus ponderaciones no son los mismos porque provienen de investigaciones estadísticas con distintos objetivos. Por tanto, no son exactamente comparables.

sobre las unidades campesinas. El tercero muestra que, adicionalmente, hay un proceso de endeudamiento que parte de la emergencia causada por la covid-19 y ha adquirido tal proporción que se convierte en un factor adicional que interfiere sobre la capacidad de reproducción de la economía campesina. En cuarto lugar, se muestra la migración como abandono del campo, en lugar de una estrategia para permanecer ahí.

1. Pérdida de poder de compra o deterioro de la relación de precios campo-ciudad

Como se ha señalado, la movilización de junio de 2022 reclamó, entre otros aspectos, por el incremento de los precios no agrícolas, lo que ocurría a nivel mundial por problemas logísticos en el transporte, el aumento de los fletes, problemas climáticos, la invasión de Rusia a Ucrania (FMI, 2022) y, en el caso del Ecuador, por influencia de la apreciación del dólar. Además de estos factores, tiene relevancia el retiro del subsidio⁸ al precio de algunos combustibles, que fue uno de los motivos que llevó al levantamiento indígena, con la adhesión de amplios sectores sociales, en octubre de 2019.⁹

Específicamente, el paro aducía que se habrían deteriorado los términos de intercambio campo-ciudad, por lo que los productores rurales deben realizar un esfuerzo mayor con el propósito de adquirir la misma canasta de bienes industriales y servicios. Sin embargo, los cambios en la producción agrícola, que posibilitarían tener más ingresos para satisfacer esa canasta de consumo, son difíciles de conseguir, pues requerirían aumentar los niveles de productividad, ya que no existe la posibilidad de expandir el área de cultivo.

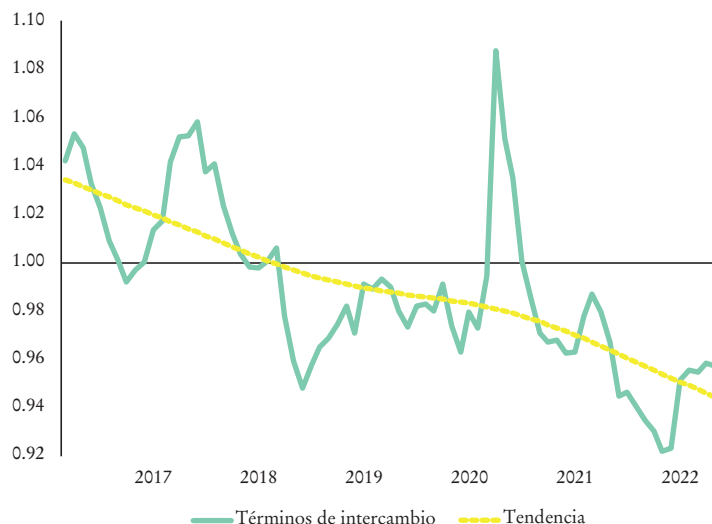
Para mostrar ese cambio en la relación de precios, se calculó un IPC que reúne sólo bienes agrícolas no procesados y otro en el que está el resto de los bienes y servicios;¹⁰ de esta manera, se tiene una aproximación de la relación de términos de intercambio campo-ciudad. En la gráfica 1 se observa que,

⁸ Es muy complejo determinar el monto de los subsidios e incluso afirmar sin ninguna duda que existe uno, porque la ausencia de información transparente impide realizar análisis independientes sobre el tema. Uno de los puntos centrales en el debate es si el precio del petróleo que recibe la Refinería de Esmeraldas debe estar contabilizado a precios de producción o a precios del mercado internacional.

⁹ Para un análisis sobre el impacto del retiro de los subsidios en la población rural, véase el artículo de Samaniego (2019).

¹⁰ Se utilizó la canasta de bienes con la que el INEC calcula el IPC cada mes. La medida que se presenta como términos de intercambio campo-ciudad tiene varias imperfecciones; la principal es que no incluye la evolución de los márgenes de comercialización.

GRÁFICA 1. *Relación de términos de intercambio campo-ciudad con base en el IPC (valor y tendencia)^a*



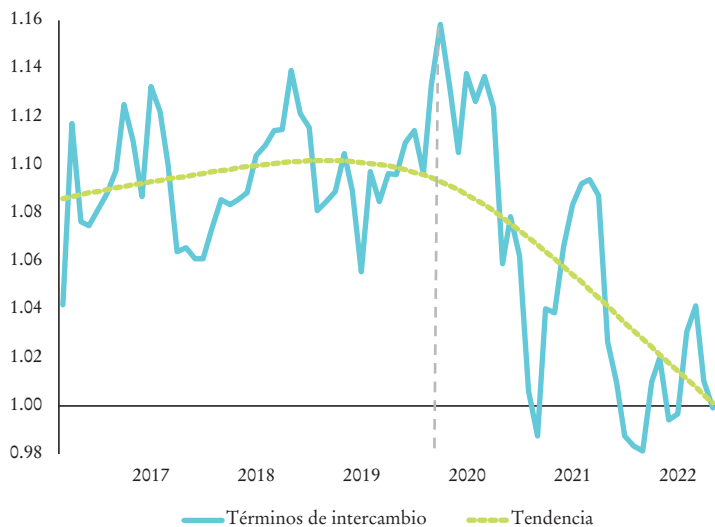
^a La tendencia fue obtenida con el filtro de Hodrick y Prescott (1997).

FUENTE: elaboración propia con datos del INEC, IPC (2015-2022).

con excepción del periodo de inicio del confinamiento severo por la pandemia de covid-19 (abril de 2020), los términos de intercambio campo-ciudad medidos con el IPC se han deteriorado, con un agudizamiento hacia finales de 2021. Sin embargo, cuando se observa la tendencia de la serie, se puede afirmar que la pérdida de poder adquisitivo de los productos agrícolas frente al resto es constante, pero llega a ser inferior a 1 desde 2018. Es decir, los ingresos provistos por la producción agrícola menguaron en 6% la capacidad de compra del resto de los bienes y los servicios en el periodo. Esta conclusión, sin embargo, se amplía al añadir la relación de términos de intercambio calculada con el índice de precios al productor (IPP).

En efecto, la evolución de los precios que recibe el productor agrícola en comparación con los de los productores no agrícolas, desde 2016 y hasta fines de 2018, muestra una tendencia creciente, pero desde principios de 2019 comienza a decrecer muy rápidamente, lo que coincide con el anuncio de la eliminación del subsidio de los combustibles en octubre de ese año. A pesar de que el levantamiento indígena de ese mes y año logra que se anclen los precios del diésel y la gasolina extra, el cambio en los precios de los combus-

GRÁFICA 2. *Relación de términos de intercambio de los productos agrícolas frente al resto de bienes y servicios, con base en el IPP (valor y tendencia)^a*



^a La tendencia fue obtenida con el filtro Hodrick-Prescott.

FUENTE: elaboración propia con datos del INEC, IPP (2015-2022).

tibles realizado antes del levantamiento tendría un efecto de más largo plazo, porque los precios de venta de los productos no agrícolas comenzaron a crecer más de prisa, como se muestra en la gráfica 2, lo que deterioró significativamente la progresión de los términos de intercambio, pese a que éstos se mantuvieron sobre la unidad en todo el periodo.

Evaluated desde esta perspectiva, se podría suponer que los productores agrícolas requerirían adoptar otras estrategias para acceder a una canasta de consumo de bienes no agrícolas similar a la anterior. Uno de los efectos de la cuarentena fue que el poder de compra de los productos agrícolas tuvo un importante crecimiento momentáneo en el mercado de consumo final, pero una significativa reducción si se observan los precios al productor. Aunque esos dos movimientos se corrigen con la caída de los precios agrícolas al consumidor, se podría considerar que, por efecto de la contracción de la demanda, los precios que recibe el productor agrícola tienen dos etapas de reducción y al final del periodo (desde los últimos meses de 2021) se recuperan. Éste podría ser el reflejo del plan de ajuste estructural, que junto con la pandemia llevó a contraer la demanda. Según información del Banco Cen-

tral del Ecuador (2024b), el consumo por persona de los hogares en productos agropecuarios cayó en 0.8% en 2019 y 0.9% en 2020, para recuperarse luego en 2021 y 2022 en 4.2 y 2.9%, respectivamente.¹¹

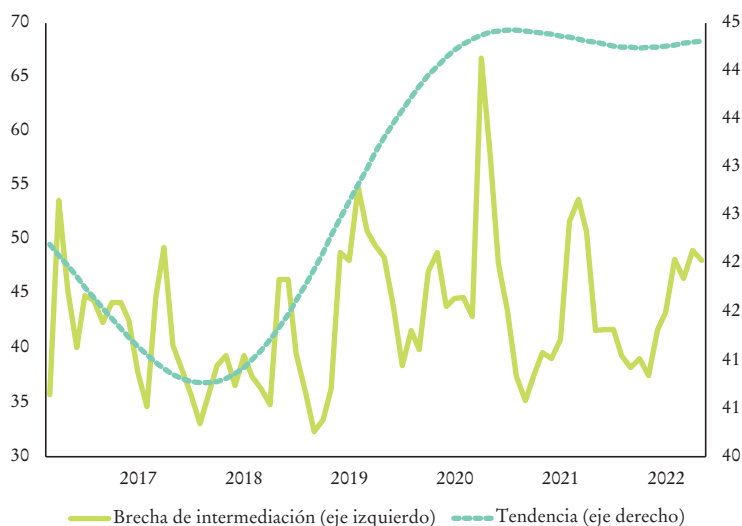
Por otra parte, la tendencia del índice de brechas de intermediación, que mide la diferencia entre los precios pagados al productor por sus bienes o servicios, y los que pagó el consumidor por la adquisición de esos mismos bienes o servicios (Gordillo, 2016), es creciente desde fines de 2018 y llega a su máximo a principios de 2020, luego de lo cual tiende a estabilizarse. Esto quiere decir, al conjugarse con los otros índices, que, además del deterioro de los términos de intercambio, los productores enfrentaron una reducción de los ingresos por el aumento del margen de intermediación, que luego de un sustancial incremento desde mediados de 2018 llegó a su máximo con el confinamiento. La carga del sustancial del incremento en el margen de intermediación entre septiembre de 2007 y de 2020 es de aproximadamente 9% (al utilizar la línea de tendencia) (gráfica 3).

Una primera conclusión con la información hasta aquí presentada es que los productores agrícolas están frente a una reducción relativa de los ingresos porque los términos de intercambio se han reducido, en un escenario simultáneo de aumento de los márgenes de intermediación, lo que obviamente influye también negativamente sobre sus ingresos; el efecto combinado, según los cálculos anteriores, estaría en alrededor de 15 por ciento.

En la agricultura, la concentración en la tenencia de la tierra¹² ocasiona que la mayoría de los productores tenga espacios limitados de cultivo, por lo que se enfrentan a una imposibilidad física de modificar la cantidad producida y, por ese mismo hecho, a la opción de cambio de la producción hacia cultivos que puedan tener mayor rentabilidad (por ejemplo, algunos cultivos permanentes) y en los que se pueda incorporar mejor tecnología; aunque esto existe en ciertos territorios (Lechón y Chicaiza, 2019), es incipiente como estrategia campesina. En este mismo ámbito, en algunas provincias hay presión por el uso de la tierra debido al crecimiento de las ciudades y

¹¹ Para obtener los valores por persona se utilizó la información que publica el Banco Central del Ecuador (2024a) en el cuadro “Serie histórica y PIB per cápita”. Lo curioso es que en 2019 la población tiene una tasa de crecimiento de 1.6%, en 2020 esa tasa se reduce a 1% y en 2021 a 0.5%, lo que no es coherente incluso con la pandemia de covid-19 y la migración. Por lo tanto, la recuperación del consumo en los últimos años podría ser menor.

¹² Torres, Báez y Maldonado (2020: 39) señalan que “según el Censo Nacional Agropecuario del año 2000, las fincas pequeñas representaban 75% del total de productores, pero sólo disponían de 12% del total de tierra. En 2012, éstas representaban 81% del total de fincas, pero sólo disponía de 15% de la tierra”.

GRÁFICA 3. Índice y tendencia en la brecha de intermediación de los bienes agrícolas^a

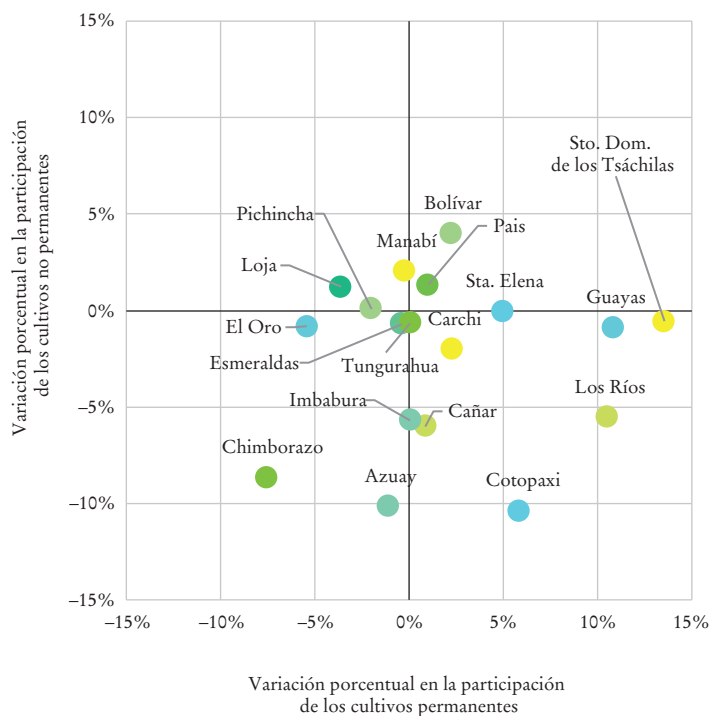
^a La tendencia fue obtenida con el filtro Hodrick-Prescott.

FUENTE: elaboración propia con datos del INEC, Índice de brechas de intermediación (IBI).

porque los cultivos destinados al mercado externo requieren ampliar el área de cultivo, ya que responden a una demanda creciente y cuentan con las posibilidades de financiamiento suficientes, lo que coincide con lo señalado por Martínez (2017). Por esa razón, en algunas zonas los campesinos incluso se ven enfrentados a perder el único sustento de vida y activo que poseen.

Como se observa en la gráfica 4, la mayoría de las provincias (excluidas las que pertenecen a la Amazonía, pues sobre ellas no existe información para el 2000) se ubica en los cuadrantes del lado derecho, y son las que tuvieron un incremento de los cultivos permanentes. En cambio, menos territorios muestran un aumento en el área dedicada a la agricultura de cultivos transitorios, que por lo general es realizada por pequeños campesinos. En este ámbito destaca Cotopaxi, provincia en la que hay un claro cambio por el ascenso de los cultivos permanentes en conjunto con la reducción de los temporales y, en otro sentido, se puede nombrar a Chimborazo, donde caen los cultivos transitorios y permanentes. En términos generales, esta información permite tener elementos para considerar como un tema relevante de investigación el desplazamiento de la producción campesina por la pro-

GRÁFICA 4. *Cambio en puntos porcentuales de la participación de los cultivos permanentes y transitorios a nivel de provincia entre 2000 y 2021 (porcentajes)*



FUENTE: elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAG), Sistema de Información Pública Agropecuaria, uso del suelo.

ducción a gran escala y la vinculada a las exportaciones. Un elemento adicional que se debe mencionar es que desde 2013 hay un crecimiento significativo de lo que el MAG en sus estadísticas denomina “otros usos”,¹³ cuya superficie se cuadruplica entre 2000 y 2021 (véase la gráfica 1A del apéndice).

Considerando esta situación, en el contexto de la hipótesis de la migración interna tanto rural como urbana, cabe preguntar qué opciones tienen los campesinos de insertarse en un trabajo asalariado, de manera que puedan percibir ingresos para compensar las limitaciones que, según la información

¹³ El “otro uso” incluye, por ejemplo, las fincas vacacionales en el campo; es decir, son territorios que ya no se dedican a cultivos o que lo hacen, pero no como una actividad principal.

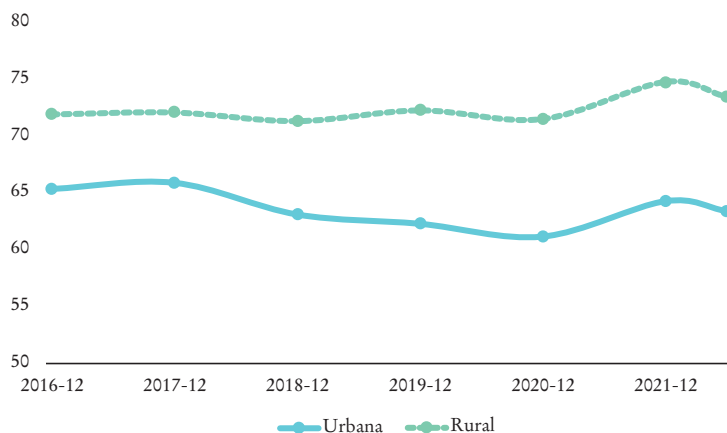
revisada, habría en el área rural. En la siguiente subsección se realiza un breve análisis de ello.

2. Reducción de ingresos y deterioro del mercado de trabajo en el ámbito urbano

A nivel nacional, Ecuador experimentó una caída de su producción cercana a 8% en 2020 con una recuperación de solamente 4.2% en 2021. En el año del inicio de la pandemia se aprobó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (LOAH), que introdujo nuevas modalidades de contratos laborales que promovieron despidos, el aumento en los procesos administrativos de conflictividad laboral (King y Altmann, 2022) y una reducción del empleo formal. La importancia de este problema es que la precarización de las condiciones de trabajo urbano y rural disminuye la posibilidad de que los campesinos obtengan ingresos “compensatorios”.¹⁴

En efecto, la participación global —es decir, el porcentaje de la población en edad de trabajar que forma parte de la población económicamente activa— mostró en 2021 un aumento de 3.2 puntos porcentuales en el área rural: más individuos se incorporaron al mercado de trabajo, pero se volvió a reducir en 2 puntos porcentuales el siguiente año (gráfica 5). En el área urbana

GRÁFICA 5. *Evolución de la tasa de participación global urbana y rural (porcentajes)*



FUENTE: elaboración propia con datos de la ENEMDU, INEC.

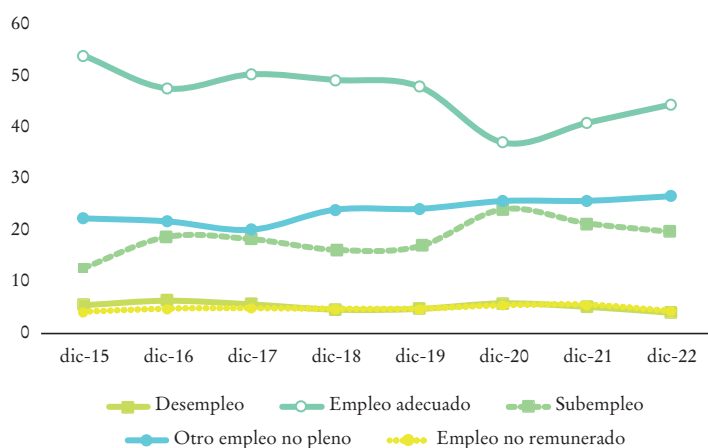
¹⁴ O sea, ingresos para compensar el deterioro de los obtenidos con las actividades agropecuarias.

el proceso ha sido más complejo, puesto que hay una reducción persistente de la tasa de participación global a partir de 2017, que se recuperó en 2021 pero no a los niveles del primer año. Es decir, muchos individuos salieron del mercado de trabajo (cerca de 1.7% o aproximadamente 150 000 personas). Esto implica que, en términos de las tasas de empleo que se van a presentar adelante, el denominador se contrae.

Para efectos de esta reflexión interesa destacar que en el área urbana antes de la pandemia ya se observaba un proceso de reducción de la oferta de trabajo, pero se revirtió en 2021, lo cual podría corresponder con el deterioro de los ingresos. Es decir, frente a su caída —se mostrará más adelante—, que estaría muy ligada a la pandemia y a la LOAH, los hogares urbanos estarían incorporando a la población económicamente activa (PEA) a más miembros de sus familias. Esto influye en las posibilidades de los campesinos que se trasladan a las ciudades para encontrar el “complemento” de sus menguados ingresos, pues podrían enfrentar una mayor competencia por la insuficiencia de puestos de trabajo (que se manifiesta tanto en la tasa de desempleo como en las formas de empleo no adecuado que han crecido en el área urbana).

El mercado de trabajo en el área urbana continúa, como se ha mencionado, en una situación precaria frente a lo que acontecía en 2019 (gráfica 6). En efecto, aunque el empleo adecuado se recuperó en 2021 y 2022, perma-

GRÁFICA 6. *Evolución de las categorías de ocupación de la PEA en el área urbana (porcentajes)*



FUENTE: elaboración propia con datos de la ENEMDU, INEC.

nece cerca de 3.5 puntos porcentuales por debajo de la tasa que exhibía en 2019. Un valor contrario se encuentra en el subempleo, especialmente el ocasionado por insuficiencia de ingresos, y el otro en el empleo no pleno, que aumentan en 2.8 y 2.5%, respectivamente, entre 2019 y 2022.

En estas condiciones de deterioro del empleo, interesa conocer cómo han evolucionado los ingresos y de qué manera el ajuste permitido por la LOAH está influyendo en ellos. Para conocerlo se han obtenido la media y la mediana de ingreso laboral por grupo de ocupación. En este caso suponemos que esos grupos que podrían llenar los campesinos en situación de migración temporal, en concordancia con la literatura revisada, son los denominados “Trabajadores(as) calificados agropecuarios y pesqueros” y “Trabajadores(as) no calificados, ocupaciones elementales”.

La evolución de los ingresos laborales entre 2019 y 2022 en el área rural favoreció a quienes perciben mayores sueldos, de ahí la diferencia entre la media y la mediana (cuadro 1); en el área urbana cayeron las dos medidas, pero también se observa que en 50% de la población que recibe menos recursos la reducción fue mayor. De esta forma, se concluye que los cambios en el mercado de trabajo afectaron a la población con menos ingresos en las dos áreas, pero esa afección es mayor en el área rural.

Los trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros tuvieron una de las más altas reducciones en sus ingresos laborales en el área rural, aunque

CUADRO 1. *Variación del ingreso salarial medio y mediano por categoría de ocupación, entre 2019 y 2022 (porcentajes)*

Grupo	Área urbana		Área rural	
	Media	Mediana	Media	Mediana
Personal directivo de la administración pública y las empresas	-7.3%	4.1%	-20.6%	14.6%
Profesionales científicos e intelectuales	-1.1%	2.1%	-0.4%	5.3%
Técnicos y profesionales de nivel medio	-1.8%	-3.4%	-3.2%	-7.9%
Empleados de oficina	-1.0%	-13.0%	-1.0%	-7.3%
Trabajadores de los servicios y comerciantes	-2.9%	-1.7%	-0.5%	0.0%
Trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros	-4.2%	-13.4%	4.2%	-20.0%
Oficiales operarios y artesanos	0.1%	7.5%	8.1%	4.2%
Operadores de instalaciones, y máquinas y montadoras	-1.2%	13.1%	5.2%	20.0%
Trabajadores no calificados, ocupaciones elementales	2.5%	-4.8%	-6.7%	-16.7%
Personal de las Fuerzas Armadas	20.0%	40.1%	6.5%	40.1%
Total	-2.3%	-4.5%	5.2%	-8.3%

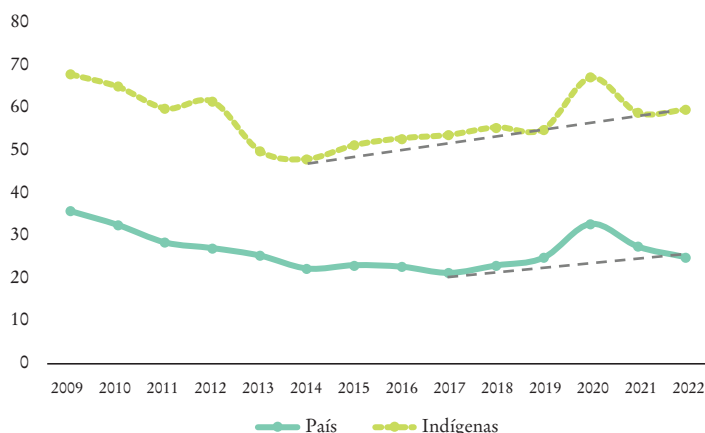
FUENTE: elaboración propia con datos de la ENEMDU, INEC.

hay signos contrarios en la media y la mediana, y en relación con las ciudades. En cambio, los trabajadores no calificados o que realizan ocupaciones elementales, categoría en la que, como se ha dicho, se supone que se emplearía la mayoría de los campesinos que se trasladan diariamente o emigran a otros territorios agrícolas o la ciudad con el objeto de complementar los ingresos obtenidos en el campo, experimentaron una caída muy grande en el área rural, la cual fue menor en el área urbana con una afectación especial a los ocupados de menores ingresos.

De ahí que la crisis y la Ley Humanitaria podrían haber causado que la estrategia campesina de sobrevivencia encuentre más dificultades porque, como se ha resaltado, habrían tenido que hacer frente a un mercado de trabajo urbano con menor demanda, y, adicionalmente, con menores ingresos. En el área rural, aunque la tasa de participación se mantiene, la reducción de los ingresos afecta a los más pobres y a los menos calificados. De esta forma se pudo haber generado un callejón sin salida, es decir, las opciones regulares que los pequeños campesinos tenían para paliar o, en el mejor de los casos, superar la pobreza, se tornan muy limitadas.

Entre 2019 y 2022, también se observa una reducción de los ingresos de jornaleros, peones y los cuentapropistas del área rural por sobre la media nacional. En efecto, la mediana de sus ingresos se contrajo en 8.3 y 9.7%, respectivamente (para revisar la información de todas las categorías, véase el cuadro 1A del apéndice). De esta manera, la pérdida de poder adquisitivo en el campo, junto con la precarización de las relaciones laborales en las áreas rural y urbana, condujeron a que los niveles de pobreza se amplíen para los habitantes del área rural, por lo que no sería una hipótesis sin ningún fundamento considerar que al menos uno de los motivos centrales de las movilizaciones de junio de 2022 se haya gestado a partir de la fractura de las opciones para obtener un nivel de vida adecuado.

Como efecto de estos movimientos la pobreza en el área rural, como se mencionó en la introducción, muestra un aumento de 2016 a 2019 cuando se utiliza el método multidimensional y por necesidades básicas insatisfechas, mientras que la que se mide por ingresos permanece estable entre 2016 y 2019 y tiene un salto de casi 10 puntos en 2020, para luego caer en 2021 a un nivel ligeramente superior al del año previo a la pandemia. La magnitud del problema en el área rural es que la pobreza por ingresos es superior a la nacional en 17 puntos porcentuales en promedio, la medida por necesidades básicas insatisfechas en 26 y la multidimensional en 31 (véase la gráfica 2A del apéndice).

GRÁFICA 7. *Incidencia de la pobreza por ingresos (porcentajes)*

FUENTE: elaboración propia con datos de la ENEMDU, INEC.

Para los indígenas la situación es aún más dramática. En efecto, la pobreza medida por ingresos tiene una reducción importante hasta 2014, pero a partir de ese año comienza a crecer lenta pero sostenidamente, hasta que en 2020 se produce un salto a 67%. En 2022 vuelve a aumentar luego de la reducción de 2021, y en el último año fue equiparable al valor medido en 2012. De esta manera se podría tener más argumentos para sostener que los factores hasta aquí analizados han dado forma a ese callejón sin salida.

En la siguiente subsección se analiza el tercer factor que podría estar afectando la situación de la población de menores ingresos y generando presión para la venta de la tierra para pagar deudas de varios tipos.

3. *Efectos de los endeudamientos y presión sobre la tierra*

Un elemento adicional por considerar, que sucedió antes de la pandemia y que mostraría la reducción de los ingresos, sobre todo en el área rural, es el crecimiento de la colocación de créditos de consumo por parte de las cooperativas de ahorro y crédito (COAC), pues éstas están más cerca de los territorios y son más accesibles para la población que vive fuera de las grandes ciudades. En Ecuador, hasta finales de 2019, existían 24 bancos privados (cinco con capital extranjero), 142 COAC (segmentos 1, 2 y 3), además de cuatro mutualistas y tres instituciones de banca pública (Ocaña Mazón,

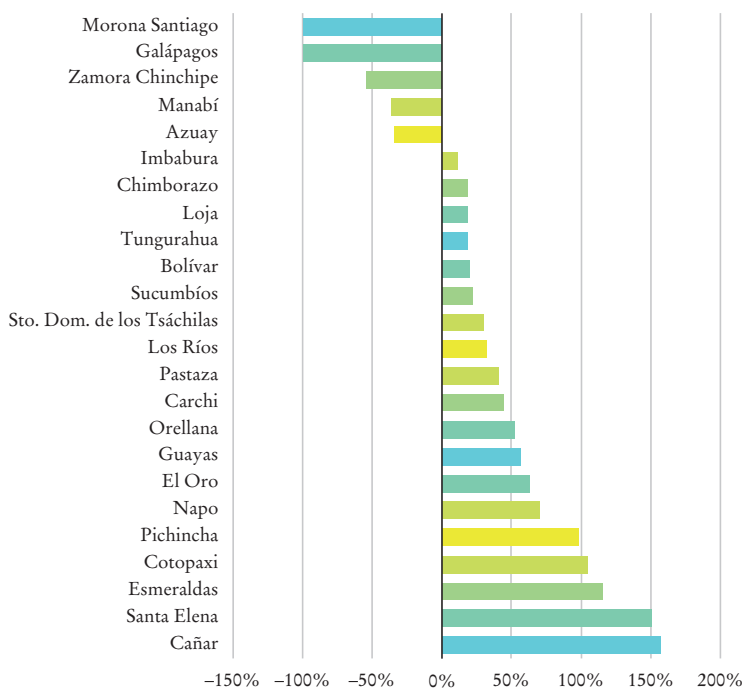
2019: 5). Según este estudio: “[...] (87.50%) de 24 bancos privados otorgaron créditos de consumo; de 142 COAC de los segmentos 1, 2 y 3, 141 (99.30%) financiaron este sector; 100% de las mutualistas (cuatro) entregó estos créditos; y 1 (33.33%) de tres entidades públicas vigentes otorgaron créditos de consumo”.

Con ello se devela que existe un aumento importante en el número de entidades que colocan crédito de consumo, especialmente a partir de 2016 cuando las cooperativas del segmento 3 empezaron a realizar también este tipo de colocaciones. En este tipo de crédito, las cooperativas han tenido el mayor incremento promedio anual de 26.16% desde 2019 hasta septiembre de 2022, mientras que en la banca privada creció a una tasa menor, en 16.36% en el mismo periodo (Ocaña Mazón, 2019). Con corte a abril de 2020, 46% de la cartera de las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1, 2 y 3 estaba concentrado en crédito de consumo y 36% en microcrédito, con sólo 6% en el segmento comercial, que tiene una tasa de interés más baja, mientras que 7.5% estaba destinado a agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (Red de Instituciones Financieras de Desarrollo y Equifax [RFR], 2020). La colocación de créditos de consumo por más cooperativas, así como la alta participación de este tipo de crédito en la cartera de las cooperativas de los segmentos 1, 2 y 3 podría haber provocado un endeudamiento inusitado en localidades no urbanas en las que las cooperativas tienen mayor acceso. Según información del MAG (2024), se encuentra un aumento de 60% del crédito destinado a cultivos agrícolas por parte de las cooperativas entre 2020 y 2021, lo que podría indicar las necesidades de financiamiento frente a las obligaciones contraídas para financiar el consumo en un escenario de pérdida de ingresos. Esta variación en ese periodo es heterogénea entre provincias, como se observa en la gráfica 8.

Se encuentra que en 19 de 24 provincias se registró un aumento del crédito para cultivos agrícolas, y en cuatro provincias (Cañar, Santa Elena, Esmeraldas y Cotopaxi) la variación está por encima de 100% en términos nominales. En cinco provincias (Morona Santiago, Galápagos, Zamora Chinchipe, Manabí y Azuay) el crédito agrícola de las cooperativas se redujo; así se encuentra que hubo un incremento en el promedio nacional.

Al analizar los niveles de morosidad por tipo de entidad, se encuentra un aumento a partir de 2012 que se reduce desde 2016 y vuelve a subir a partir de 2019, aunque en niveles inferiores al promedio de todo el sistema (Ocaña Mazón, 2019). La tasa de morosidad ampliada aumentó en 1.6 puntos por-

GRÁFICA 8. *Tasa de variación del crédito agrícola otorgado por las cooperativas de ahorro y crédito entre 2020 y 2021 (porcentajes)*

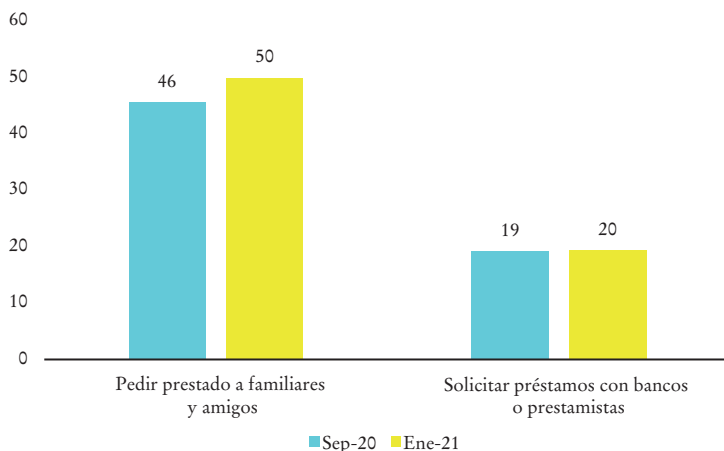


FUENTE: elaboración propia con datos del MAG (2024).

centuales en 2022, llegó a un nivel similar al de 2019 (SEPS, 2024). Sin embargo, esta situación fue variable por provincia: Napo (6.5%), Santa Elena (5.4%), Guayas (5.3%) y Orellana (4.9%) son las que tienen índices de morosidad en crédito de consumo más altos que el promedio del total del sistema. Además, en 2019 había una tendencia decreciente en el porcentaje de la tasa de abono de estos créditos que llegó a 48.2% (Ocaña Mazón, 2019). Todos estos indicadores se deterioraron con la irrupción de la pandemia de covid-19.

Las consecuencias de estos endeudamientos por los efectos del confinamiento, la paralización de actividades y la pérdida de empleo o deterioro de las condiciones de trabajo son un tema que ha pasado desapercibido y que justamente consta como segundo punto de la agenda de lucha nacional

GRÁFICA 9. *Decisiones tomadas por los hogares por falta de dinero o recursos en 2020 (porcentajes)*



FUENTE: elaboración propia con datos del Lesnia (2022).

planteada¹⁵ por la Conaie (2022), porque incide en las condiciones de vida. Incluso, de acuerdo con las encuestas Encovid (Laboratorio de Estudios Sobre la Niñez y Adolescencia [Lesnia], 2022), los hogares tuvieron que recurrir a varias estrategias para sobrevivir. Así, por falta de dinero o recursos, 50.6% de los hogares con niños pidió prestado a familiares y amigos, este porcentaje incrementa su valor previo en casi cinco puntos porcentuales. Mientras que la solicitud de préstamos a bancos o prestamistas se mantuvo cercana a 20%, como se observa en la gráfica 9.

De acuerdo con la misma fuente, 39.4% de los hogares dejó de pagar sus deudas en enero de 2021, situación que, si bien se reduce respecto al cuatrimestre previo (42.6%), fue un tema inquietante en ese momento. Las condiciones económicas luego de la pandemia se agravaron para la población que perdió su empleo, vio disminuidos sus ingresos laborales, afrontó una merma en los beneficios obtenidos del trabajo por cuenta propia (tanto en el área urbana como rural) o tuvo una emergencia de salud con una combinación de pérdida de ingresos y aumento de gastos, que pudieron haber sido

¹⁵ Dice textualmente: “Alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas)” (Conaie, 2022).

cubiertos con deuda con mayor afectación en el área rural, como se explicó previamente.

El mismo Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Banco de Pagos Internacionales [BPI], 2022) señaló en uno de sus últimos comunicados que los supervisores bancarios deben tener en cuenta que elevados niveles de endeudamiento pueden afectar la capacidad futura de los prestatarios para pagar sus deudas. Si a esto le sumamos los problemas encontrados entre trabajo asalariado y trabajo campesino, entonces la situación se agrava.

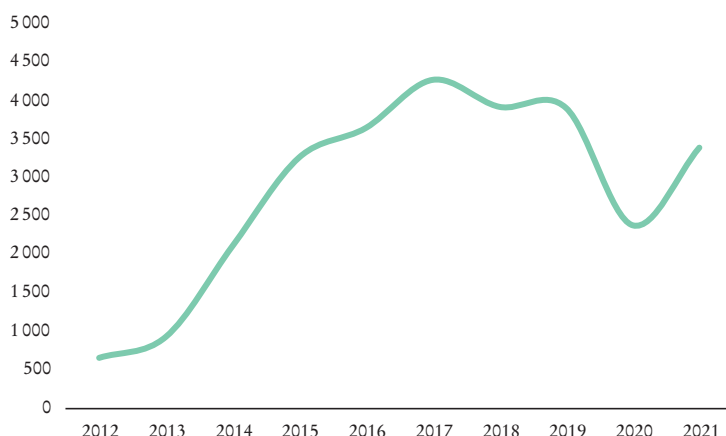
En términos generales, la saturación de hospitales implicó la desatención de personas que en ciertos casos recurrieron a establecimientos de salud privados. En Ecuador, se presentaron varios problemas de atención en los sistemas de salud pública con sobretasas de muertes, y algunas personas tuvieron que recurrir al endeudamiento o a la venta de activos para cubrir estos rubros. Incluso las personas afiliadas a la seguridad social utilizaron los créditos de más corto plazo para pagar estos rubros: “En 2019, el destino principal de los créditos quirografarios fue la restructuración de pasivos con 37% de participación en el total. Mientras tanto, en 2020 fue salud con 42%, el cual aumentó casi seis puntos porcentuales en comparación al año anterior” (Serrano Crespo, 2022: 21).

Otro tema relevante y relacionado con los términos de endeudamiento es el incremento de embargos de bienes inmuebles por deudas, aspecto que se planteó también como segundo punto¹⁶ de la agenda del Consejo ampliado de la Conaie. En la gráfica 10 se presentan los embargos aceptados de bienes inmuebles en materia civil con información proporcionada por el Consejo de la Judicatura.

Estos embargos aceptados en materia civil se produjeron principalmente en Pichincha, Azuay, Loja, Tungurahua y El Oro; en estas provincias, menos en Tungurahua, existió una disminución de los cultivos permanentes. Ello puede contribuir a un cambio en el uso de la tierra, como se observa en la gráfica 1A del apéndice. En efecto, en la categoría “Otros usos”, existió un aumento en Guayas (11.5%), Tungurahua (4.8%), Imbabura (4.6%) y Pichincha (4.2%) de 2002 a 2021.

La evolución del uso del suelo durante los últimos 20 años marca la tendencia de crecimiento de la superficie cultivada de cultivos permanentes orientados hacia la exportación, como banano, café y otros cultivos en la Costa

¹⁶ “No al embargo de los bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago” (Conaie, 2022).

GRÁFICA 10. *Número de embargos aceptados de bienes inmuebles en materia civil^a*

^a Las variables no permiten determinar que se traten únicamente de embargos de bienes inmuebles.
 FUENTE: elaboración propia con datos del Consejo de la Judicatura (2022).

ecuatoriana. Mientras que en la Sierra se encuentran las flores, con su particularidad vinculada con los costos de las regalías¹⁷ —que deben asumir los productores—, la uvilla y el tomate de árbol. Respecto de los cultivos transitorios en la Sierra ecuatoriana se debe destacar el brócoli.

De acuerdo con la información del MAG, en Ecuador a partir de 2014 es cuando empiezan a sentirse problemas en la economía y curiosamente cuando salieron a la luz pública los de sobreendeudamiento, se encuentra un aumento significativo de las superficies en “Otros usos”. En 10 años (2012-2021) las áreas no cultivadas dedicadas a “Otros usos” aumentaron en 259% y pasaron de una participación de 1.7 a 5.8% del total de hectáreas, lo que hace presumir que los campesinos están vendiendo sus tierras y que existen procesos de embargo por deudas.

4. *Despoblamiento del campo e incluso migración externa*

El despoblamiento del campo es otro elemento del que no se tiene claridad y que, debido a los cambios realizados en la metodología de levantamiento del Censo de Población en 2022, no puede ser corroborado. Sin embargo, de

¹⁷ Justamente, en el punto 3 de la agenda de la Conaie (2022) se menciona “no al cobro de regalías en las flores”.

CUADRO 2. *Saldo migratorio de ecuatorianos (habitantes)*

<i>Año</i>	<i>Entradas</i>	<i>Salidas</i>	<i>Saldo migratorio</i>
2012	1 025 310	1 022 205	3 105
2013	1 143 116	1 137 875	5 241
2014	1 269 675	1 278 336	(8 661)
2015	1 374 893	1 398 167	(23 274)
2016	1 493 768	1 550 898	(57 130)
2017	1 506 290	1 547 312	(41 022)
2018	1 475 655	1 497 680	(22 025)
2019	1 513 513	1 544 708	(31 195)
2020	509 599	508 095	1 504
2021	786 215	867 973	(81 758)
2022	1 243 713	1 357 644	(113 931)

FUENTE: elaboración propia con datos del INEC (2023).

acuerdo con los registros administrativos de migraciones internacionales, en 2021 había una emigración neta de más de 90 000 personas en el Ecuador y hasta 2022 de casi 230 000 personas. La tendencia se mantiene en 2023. Si se desagrega esta información por nacionalidad del emigrante, en este caso se considera sólo a los ecuatorianos, se puede observar que esta situación ya había iniciado en 2014 y fue paulatinamente aumentando por las dificultades económicas que se comenzaron a observar en 2015 y 2016. En este último año se encuentra un pico de migración de 57 000 ecuatorianos (cuadro 2).

Como se observa en el cuadro 2, entre 2021 y 2022 este fenómeno se agudiza con un saldo migratorio negativo de 195 689 ecuatorianos, muy superior al saldo negativo acumulado durante 2014-2019, de 183 307. A esto se agregan varios reportes de emigrantes que intentan cruzar la frontera estadounidense desde México y que incluso ha provocado que países como Guatemala exijan visa a los ecuatorianos o el cierre del paso por el Darién.

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como se desprende del análisis de la literatura, la estructura de la producción agrícola en Ecuador ha pasado por varios procesos de transformación que no terminan de consolidarse, además de contar con políticas erráticas que no han mitigado los problemas de fondo y que todavía persisten. Este artículo

expone elementos adicionales para comprender de qué manera las estrategias económicas de los productores agrícolas, especialmente aquellos localizados en la Sierra, encuentran límites y mutaciones por los cambios en el contexto general.

Como señalan los estudios de caso revisados, frente a las limitaciones que ocasiona la propiedad de pequeñas unidades de producción, los campesinos han optado por integrarse parcial o totalmente como asalariados en otras explotaciones agrícolas, o en las ciudades, para complementar los ingresos obtenidos de la producción propia. Otro grupo ha podido acumular excedentes, lo que le ha permitido aumentar el tamaño de las unidades agrícolas e incorporar tecnología para incrementar la producción de cultivos permanentes (invernaderos) ligados directa o indirectamente a la agroexportación. Desde el inicio de este artículo se había supuesto que los cuatro factores que se han añadido a la comprensión de la situación socioeconómica de los campesinos podrían también ayudar a entender las movilizaciones ocurridas en 2019 y 2022.

Se ha podido mostrar que existe un deterioro de la relación de precios campo-ciudad que supone un menor poder de compra para ingresos generados en las actividades agrícolas; asimismo, y simultáneamente, se observa un aumento de los márgenes de comercialización, es decir, los campesinos ceden una mayor parte de sus ingresos agrícolas a los intermediarios. Estos dos efectos detectados a través de la evolución de los precios llevan a que una de las reacciones para restituir los menguados ingresos sea extender el tiempo destinado a trabajos como asalariados, sea en la propia área rural o en las ciudades pequeñas, medianas y grandes.

Se supone que el mejoramiento de la red vial ha acortado los tiempos y ha ampliado el territorio en el que pueden ofertar la fuerza de trabajo (Obregón-Biosca, 2018). Además, es necesario agregar que la movilización a otras plazas tiene costos económicos, familiares y sociales que son evaluados en el momento de decidir sobre los desplazamientos (Satterthwaite y Tacoli, 2003). Los costos asociados no sólo se limitan al transporte, sino que, dependiendo de la distancia, también incluirán alimentación y vivienda, entre otros (Braun, 2007), de ahí provendría la importancia que tiene el mantenimiento del precio de los combustibles, una de las principales demandas en los dos levantamientos.

Sin embargo, ¿cuáles son las posibilidades de obtener un ingreso complementario en actividades remuneradas rurales y urbanas? La respuesta es que

esa opción cada vez se limita más debido al significativo deterioro de las condiciones de empleo. Pese a que el desempleo se ha mantenido bajo y se redujo luego del pico al que ascendió con la pandemia, también hay una pérdida importante de empleo adecuado, lo que se ha manifestado en que la mayoría de la población económicamente activa esté subempleada, como empleado no remunerado o en la categoría de otro empleo no adecuado. Como conocemos, el subempleo se produce porque en el momento de ser encuestado el individuo responde que está buscando otro empleo, pues quiere obtener un mejor salario o desea trabajar más horas.

Esta respuesta también se limita porque hay una reducción significativa de los ingresos tanto medios como medianos en todas aquellas categorías de ocupación que corresponden al trabajo asalariado agrícola y aquellas en el área urbana que podrían ser la opción de empleo para los migrantes del campo. La reducción es grande y afecta especialmente a la población con menos ingresos, de ahí que haya una diferencia importante entre la media y la mediana. Esto ocurre sin incorporar —porque no es posible medir— los costos que implica el traslado. De ahí, se supone que el saldo que obtienen los campesinos por el trabajo asalariado “complementario” es inferior al que podían conseguir antes, por lo que la situación de los ingresos en términos globales se ha deteriorado.

La desmejora de los ingresos se manifiesta en un aumento considerable de la incidencia de la pobreza. Si bien es un fenómeno que afecta a toda la sociedad, lo que eventualmente pudo ser un motivo del amplio respaldo que obtuvieron las movilizaciones en el área urbana, cuando se analiza el indicador únicamente para la población indígena, se observa una brecha muy importante: la falta de recursos económicos para acceder a un conjunto mínimo de bienes que permitan la reproducción es muy alto, afecta a cerca de 60% de la población, lo que implica que ésta ha regresado a las condiciones a las que se enfrentaba 10 años antes. Pero las carencias se extienden también a otras dimensiones si se las evalúa con el índice de pobreza multidimensional, lo que podría implicar el desarrollo de varias patologías sociales (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1986) que muestran la incapacidad de la sociedad de resolver problemas de la estructura socioeconómica, uno de los cuales se origina en las limitaciones en la aplicación de los varios intentos de reforma agraria en el Ecuador (Gondard y Mazurek, 2001).

Frente a estas condiciones se observa un incremento sustancial del endeudamiento destinado a las actividades agrícolas, así como de aquel destinado

al consumo; como trasfondo, durante la pandemia los requerimientos de financiamiento por parte de los hogares fueron amplios. La situación se agrava al observar que la cartera vencida ha crecido significativamente, por lo que se han ejecutado cada vez más embargos para recuperar esas deudas. Este desenlace podría indicar que, a pesar del papel que están cumpliendo las cooperativas de ahorro y crédito en ámbito rural al expandir la oferta de crédito, éste no puede ser recuperado porque, como se ha explicado, hay factores estructurales que interfieren para que los prestatarios honren sus deudas. De esta manera, se comprende por qué la condonación de las deudas estaba dentro de los puntos planteados por la Conaie.

En referencia a los activos y los pasivos, se podría suponer que los primeros están amenazados, especialmente la tierra, tanto por el aumento del endeudamiento en un escenario de contracción de los ingresos, como por la expansión de los agronegocios; a partir del cambio en el uso de la tierra se podría sospechar la vigencia de este proceso. Se había señalado que, eventualmente, esto podría tener como desenlace la agudización de la fase de acumulación por desposesión (Martínez, 2017), que además se podría consolidar por el traslado de la población más joven, parte potencial del campesinado, al trabajo asalariado en actividades agrícolas o por la migración definitiva hacia las ciudades o el exterior.

Los factores analizados se relacionan entre sí y muestran el deterioro en la calidad de vida en el área rural (lo que además se observa en las cifras de pobreza), debido a la concurrencia de varios procesos, como la eliminación del subsidio al precio de los combustibles, el endeudamiento y otros elementos ligados a procesos estructurales. Entre los últimos parece importante recordar que la combinación de estrategias está generando un proceso de diferenciación entre los campesinos, pues unos permanecerán o verán deteriorar aún más sus condiciones de vida, mientras que otros están aprovechando la articulación con las empresas agroindustriales, ya sea como asalariados o proveedores, pero también se reportan los casos en los que perdieron sus trabajos como asalariados durante la pandemia, utilizaron los conocimientos adquiridos y el capital ahorrado para invertir en la tecnificación de las tierras y la expansión de las unidades de producción (Lechón y Chicaiza, 2019). Esto implica que la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de los ingresos como asalariados tiene una afectación diferenciada, lo que eventualmente se podría manifestar en conflictos en el interior de las comunidades y de los movimientos a los que pertenecen.

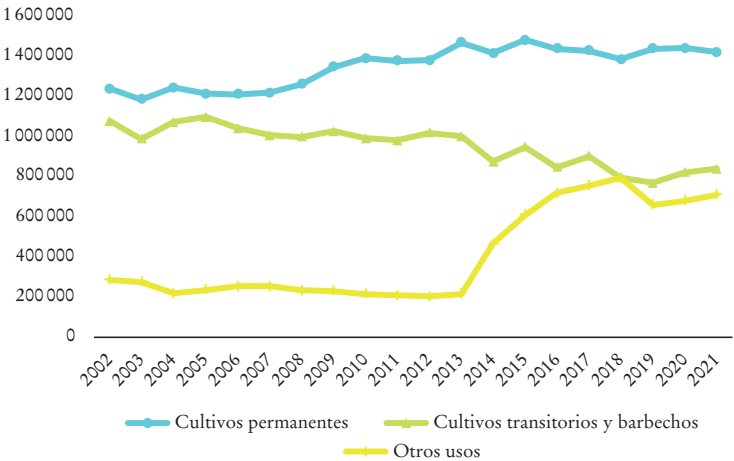
Por otra parte, si se regresa a un nivel de análisis global, el escenario actual está signado por los efectos de la austeridad en el gasto público corriente y de capital, en el limitado crecimiento económico y los problemas macroeconómicos que vive Ecuador,¹⁸ por lo que la situación se vuelve aún más compleja. En el caso analizado en este artículo, es preciso comprender la situación de la población indígena y campesina; en caso contrario, no sólo la insatisfacción rural se mantendrá, sino que también se arriesgan la soberanía y la seguridad alimentaria. Como señalan King, Samaniego y Carranza (2021), uno de los factores que hicieron que la crisis provocada por la covid-19 fuera contenida en Ecuador es que el país dispone de una oferta suficiente de producción de alimentos.

Esa oferta proviene en su mayor parte de los pequeños campesinos que aún despliegan su actividad en el agro porque no han migrado. Sin embargo, lo que se ha identificado en este análisis es que existe un proceso multifactorial que ha creado incentivos —negativos y positivos— para que los habitantes y los trabajadores del campo migren hacia las ciudades o al exterior. Si este proceso continúa y, por ejemplo, se consolida la tendencia a la concentración de la tierra, se tendría por efecto el aumento en la oferta de agroexportación, en desmedro de la producción de alimentos para el mercado interno. Por tanto, si no existe una política integral para resolver los problemas de los pequeños y medianos productores campesinos, a más de los costos a los que se verá sometida esa población por el deterioro de la situación socioeconómica, un país con una riqueza agrícola muy grande podría verse abocado a enfrentar problemas de seguridad y soberanía alimentaria en el mediano y el largo plazos si a lo anterior se suman los efectos que puede causar el cambio climático.

¹⁸ El presupuesto destinado a inversión pública ha tenido durante los últimos años una reducción constante, lo que ha limitado la capacidad de facilitar servicios financieros y no financieros como parte de la política pública a favor de los sectores indígenas y campesinos.

APÉNDICE

GRÁFICA 1A. *Evolución de la superficie cultivada en Ecuador de 2002 a 2021*

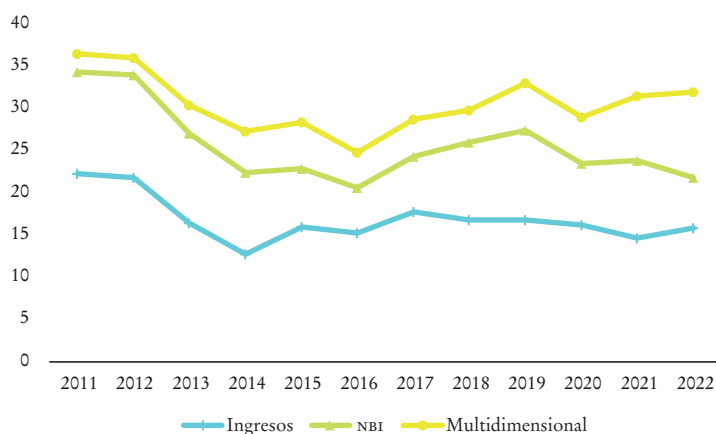


FUENTE: elaboración propia con datos del MAG, Sistema de Información Pública Agropecuaria, uso del suelo.

CUADRO 1A. *Variación del ingreso laboral medio y mediano por categoría de ocupación y área, de 2019 a 2022*

Categoría de ocupación	Media		Mediana	
	Urbana	Rural	Urbana	Rural
Empleado de gobierno	3.2%	5.1%	0.3%	9.2%
Empleado privado	-3.0%	-2.0%	2.2%	0.9%
Jornalero o peón	-9.0%	0.9%	-3.2%	-8.3%
Patrono	-6.0%	22.3%	-4.1%	27.9%
Cuenta propia	3.0%	-9.6%	0.0%	-9.7%
Empleado doméstico	0.9%	-29.0%	5.3%	-25.0%
Total	-4.8%	-6.9%	-11.8%	-1.2%

FUENTE: elaboración propia con datos del INEC.

GRÁFICA 2A. *Diferencia entre pobreza rural y pobreza urbana (puntos porcentuales)*

FUENTE: elaboración propia con datos del INEC.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, A., Falconí, F., y Jácome, H. (2006). ¿Qué pasa si Ecuador no firma el Tratado de Libre Comercio? *Íconos*, (24), 17-22.
- Álvarez-Berrios, N., Parés-Ramos, I., y Aide, M. (2013). Contrasting patterns of urban expansion in Colombia, Ecuador, Peru, and Bolivia between 1992 and 2009. *AMBIO A Journal of Environment and Society*, 42(1), 29-40. Recuperado de: <https://doi.org/10.1007/s13280-012-0344-8>
- Ascher, F. (2004). *Los nuevos principios del urbanismo*. Madrid: Alianza.
- Banco Central del Ecuador (2023). Cuentas nacionales anuales. Retropolación. Recuperado de: https://contenido.bce.fin.ec/documentos/informacioneconomica/cuentasnacionales/ix_cuentasnacionalesanuales.html#
- Banco Central del Ecuador (2024a, 9 de enero). Operaciones del sector público no financiero, base devengado. Recuperado de: <https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Administracion/WEB.png>
- Banco Central del Ecuador (2024b, 15 de febrero). Cuentas nacionales anuales. Obtenido de Gasto del consumo final de los hogares por producto. Recuperado de: https://contenido.bce.fin.ec/documentos/informacioneconomica/cuentasnacionales/ix_cuentasnacionalesanuales.html#
- Bourguignon, F. (1990). Growth and inequality in the dual model of develop-

- ment: The role of demand factors. *Review of Economic Studies*, 57(2), 215-228. Recuperado de: <https://doi.org/10.2307/2297379>
- BPI (2022, 2 de marzo). Newsletter on Covid-19 related credit risk issues. Recuperado de: https://www.bis.org/publ/bcbs_nl26.htm
- Braun, J. von (2007, 7-9 de junio). *Rural-Urban Linkages for Growth, Employment, and Poverty Reduction* (conferencia). Fifth International Conference on the Ethiopian Economy. Addis Ababa.
- Bretón, V. (2025). Las cenizas del Ave Fénix: etnicidad y protesta social en el Ecuador poscorreísta. *Latin American Research Review*, 1-16.
- Conaie (2022). Consejo ampliado. Por incapacidad y falta de voluntad del gobierno se activa la movilización social en Ecuador. Recuperado de: <https://rebelion.org/movilizacion-nacional-de-los-pueblos-indigenas-campesinos-y-organizaciones-sociales/>
- Consejo de la Judicatura (2022, diciembre). Sistema automático de trámite judicial ecuatoriano (SATJE). Recuperado de: <https://procesosjudiciales.funcionjudicial.gob.ec/busqueda>
- Cuvi, J., y Acosta, A. (2022). Paro indígena: entre la plurinacionalidad y la vieja política. Entretelones y repercusiones de las movilizaciones de junio de 2022. *Onteaiken*, (34), 46-55.
- Dussel, E. (1994). *1492: el encubrimiento del otro. Hacia el origen del “mito de la Modernidad”*. La Paz: Plural Editores.
- Fernández-Wulff, P., Dubler, N., Sosa, A., y Schutter, O. de (2020). El papel del FMI en la protección social: prometedores cambios en políticas y desafíos persistentes. *Derechos en Acción*, 18(18), 382-404. Recuperado de: <https://doi.org/10.24215/25251678e486>
- Figuroa, A. (1979). Política de precios agropecuarios e ingresos rurales en el Perú. *Allpanchis*, 11(14), 25-50.
- FMI (2022). Perspectivas de la economía mundial. Washington, D. C.: FMI.
- Garuda, G. (2000). The distributional effects of IMF programs: A cross-country analysis. *World Development*, 28(6), 1031-1051. Recuperado de: [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(00\)00002-4](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(00)00002-4)
- Gondard, P., y Mazurek, H. (2001). Treinta años de reforma agraria y colonización en el Ecuador (1964-1994). *Estudios de Geografía*, 10, 15-40.
- González, M. (2022, 14 de junio). Detención de Leonidas Iza estuvo marcada por contradicciones y traslados. *Primicias*. Recuperado de: <https://www.primicias.ec/noticias/politica/contradicciones-traslados-detencion-leonidas-iza/>

- Gordillo, L. (2016). *Metodología del índice de brechas de la intermediación*. Quito: INEC.
- Guerrero, A. (1977). Renta diferencial y vías de disolución de la hacienda precapitalista en el Ecuador. *Caravelle. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien*, (28), 47-72.
- Gutiérrez-Rubí, A. (2019). *Gestionar las emociones políticas*. Barcelona: Gedisa.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ª ed.). México: McGraw-Hill.
- Hidalgo Flor, F. (2020). Comunidad, ágora, barrio: pilares del levantamiento indígena-popular. *Sociología y Política Hoy*, (3), 61-69. Recuperado de: <https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/hoy/article/view/2534>
- Hodrick, R. J., y Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. *Journal of Money, Credit and Banking*, 29(1), 1-16. Recuperado de: <https://doi.org/10.2307/2953682>
- Ibarra, H. (2016). Génesis y significado de la Reforma Agraria de 1964. En F. Rohn y C. Pástor, *50 años de Reforma Agraria. Cuestiones pendientes y miradas alternativas* (pp. 21-62). Quito: UASB/Ediciones La Tierra.
- INEC (2023, 17 de diciembre). Tabulados de la encuesta de superficie y producción agropecuaria continua ESPAC 2022. Recuperado de: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec//estadisticas-agropecuarias-2/>
- INEC (2024a, 9 de enero). Índice de pobreza multidimensional. Recuperado de: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza-multidimensional/>
- INEC (2024b, 10 de febrero). Sistema de estadísticas laborales y empresariales. Recuperado de: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-estadisticas-laborales-empresariales/>
- Iza, L., Tapia, A., y Madrid, A. (2021). *Estallido. La rebelión de Octubre en Ecuador*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Jordán, F. (2003). Reforma agraria en el Ecuador. En J. Vargas, *Proceso agrario en Bolivia y América Latina* (pp. 285-317). La Paz: Plural Editores.
- Juncosa, J. E., y Aguirre, M. (2023). Del Paro Nacional al diálogo entre el movimiento indígena, las organizaciones sociales y el gobierno ecuatoriano. *Revista Antropología y Derecho*, (11), 60-80.
- Kautsky, K. (2015). *La cuestión agraria*. Marxists Internet Archive.
- King, K., y Altmann, P. (2022). Between justice and money: How the Covid-19 crisis was used to de-differentiate legality in Ecuador. *International Journal for the Semiotics of Law*, 35, 1039-1057. Recuperado de: <https://doi.org/10.1007/s11196-021-09877-z>

- King, K., y Samaniego, P. (2020). Ecuador: Into abyss thanks to the structural adjustment policies of the Extended Fund Agreement with the IMF. *Cuadernos de Economía*, 39(80), 541-566. Recuperado de: <https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v39n80.82581>
- King, K., Samaniego, P., y Carranza, C. (2021). Facing COVID-19 in Ecuador: A blueprint for monetary policy and food sovereignty. *Revue de la Régulation*, (29). Recuperado de: <https://doi.org/10.4000/regulation.18524>
- Korovkin, T. (2005). Creating a social wasteland? Non-traditional agricultural exports and rural poverty in Ecuador. *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, (19), 47-67. Recuperado de: <https://doi.org/10.18352/erlacs.9662>
- Lechón, W., y Chicaiza, J. (2019). De la agricultura familiar campesina a las microempresas de monocultivo. Reestructura socioterritorial en la Sierra norte del Ecuador. *Eutopía: Revista de Desarrollo Económico Territorial*, (15), 192-210. Recuperado de: <https://doi.org/10.17141/eutopia.15.2019.3875>
- Lesnia (2022, 1º de septiembre). Encuesta sobre el bienestar de los hogares antes de la pandemia de covid-19 en el Ecuador (Encovid). Quito: IIE/PUCE.
- Lewis, W. A. (2024/1960). Desarrollo económico con oferta ilimitada de mano de obra. *El Trimestre Económico*, 90(364), 975-1029. Recuperado de: <https://doi.org/10.20430/ete.v91i364.2522>
- Lyall, A., y Colloredo-Mansfeld, R. (2024). The evolving force of community: Peasant uprisings and post-agrarian aspirations in Ecuador. *The Journal of Peasant Studies*, 51(7), 1-20. Recuperado de: <https://doi.org/10.1080/03066150.2024.2304799>
- MAG (2024, febrero). Información financiera agropecuaria. Recuperado de: <https://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/inclusion-financiera/credito-agropecuario>
- Mancero, M. (2023). Paro Nacional 2022, derrotas y victorias. *Revista Sociología y Política Hoy*, (8), 33-52.
- Martínez, L. (2005). Migración internacional y mercado de trabajo en Ecuador. En G. Herrera, M. C. Carrillo y A. Torres, *La migración ecuatoriana, transnacionalismo, redes e identidades* (pp. 147-168). Quito: Flacso.
- Martínez, L. (2017). Agribusiness, peasant agriculture and labour markets: Ecuador in comparative perspective. *Journal of Agrarian Change*, 17(4), 680-683. Recuperado de: <https://doi.org/10.1111/joac.12188>
- Max-Neef, M., Elizalde, A., Hopenhayn, M. (1986). *Desarrollo a escala humana*. Santiago de Chile: Cepaur.

- Murmis, M. (1980). El agro serrano y la vía prusiana de desarrollo capitalista. En O. Barsky, A. Barril, J. Carrón, G. Cosse, P. de la Torre y C. Furche, *Ecuador: cambios en el agro serrano* (pp. 7-50). Quito: Flacso/Ceplaes.
- Obregón-Biosca, S. (2018). Características de movilidad de la población residente entre el medio urbano y rural de una zona metropolitana. *Papeles de Población*, 24(97), 145-172. Recuperado de: <https://doi.org/10.22185/24487147.2018.97.28>
- Ocaña Mazón, E. (2019). *Comportamiento del crédito de consumo del sistema financiero nacional* (documento de trabajo, 3). Quito: Superintendencia de Bancos. Recuperado de: https://www.superbancos.gob.ec/estadisticas/wp-content/uploads/sites/4/downloads/2020/01/comportamiento_credito_consumo_sept_19.pdf
- Ospina, P. (2022). El Paro Nacional de junio 2022 ¡Otra vez la Conaie! *Ecuador Debate*, (116), 11-27.
- Ospina, P., Hollenstein, P., y Latorre, S. (2020). *Territorios, ruralidades, ambiente y alimentación en Ecuador. Un balance de la investigación (2000-2019)*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- RAE (2025). Huasipungo. Diccionario panhispánico del español jurídico. Recuperado de: <https://dpej.rae.es/lema/huasipungo>
- RFR (2020). *Covid-19 y sus implicaciones en el Sistema Financiero Nacional*. Quito: RFR.
- Romo, B. (2022). *Expansión del empleo no adecuado en el Ecuador por efecto de la pandemia covid-19, periodo 2018-2021* (tesis de grado). Quito: Facultad de Economía-Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Salgado, W. (2020). Ecuador sin brújula: empobrecidos, endeudados, sometidos al FMI. *Ecuador Debate*, (111), 11-34.
- Samaniego, P. (2019, 24 de octubre). Quitar el subsidio a los combustibles mejora la distribución pero aumenta la pobreza. *Gestión Digital*. Recuperado de: <https://revistagestion.primicias.ec/economia-y-finanzas-analisis/quitar-el-subsidio-los-combustibles-mejora-la-distribucion-pero/>
- Samaniego, P., y Maldonado, R. (2021). *Desigualdades en tiempos de pandemia: la situación de los hogares con niñas, niñez y adolescentes en Ecuador* (documento de trabajo, 2). Quito: Instituto de Investigaciones Económicas-Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Satterthwaite, D., y Tacoli, C. (2003). The role of small and intermediate urban centres in rural and regional development and poverty reduction.

- En D. Satterthwaite y C. Tacoli, *The Urban Part of Rural Development: The Role of Small and Intermediate Urban Centres in Rural and Regional Development and Poverty Reduction* (pp. 12-33). International Institute for Environment and Development. Recuperado de: <https://www.iied.org/9226iied>
- SEPS (2024, 14 de abril). DATA SEPS. Recuperado de: <https://data.seps.gob.ec/#/dashboards/analytics/0/7>
- Serrano Crespo, C. (2022). *Análisis de la cartera de créditos del BIESS de 2016 a 2020* (nota técnica, 1). Observatorio de Financiamiento para el Desarrollo.
- Torres, N., Báez, J., y Maldonado, P. Y. (2020). El problema estructural de la tierra en Ecuador: concentración y minifundización. En N. Torres, J. Báez y P. Y. Maldonado, *Tendencias en la estructura agraria, inequidad rural y derecho a la alimentación y nutrición* (pp. 26-44). Quito: FIAN Ecuador.
- Unda, R. (2022). Paro nacional indígena y movilización social en Ecuador. El trayecto de octubre 2019 a junio 2022. *Boletín Onteaiken*, (34), 56-67.